

**TRATA DE PERSONAS, EN ESPECIAL MUJERES Y NIÑOS
EN LOS PAISES DE AMERICA***

**Un informe regional del alcance del problema y
La respuesta gubernamental y no gubernamental**

Preparado por

The Protection Project

De la

Universidad Johns Hopkins, Escuela de Estudios Internacionales Avanzados

* El presente es un informe sobre el problema de la trata de personas en los países de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe adopta un enfoque integral ante la trata de personas en los países del hemisferio, en el se estima que cada año cerca de 700,000 y 2 millones de personas son víctimas de trata de personas entre países de origen, tránsito y destino. El informe documenta la trata no sólo para propósitos de prostitución sino también para otras formas de explotación sexual. En este contexto, el informe se concentra principalmente en el turismo sexual y la pornografía infantil, aunque también documenta la trata laboral en especial de niños y niñas y el servicio doméstico. Se consideran además, la trata para propósitos de adopciones ilícitas de un país a otro, así como para propósitos militares. Estas formas de trata son atribuidas a varios factores que contribuyen con su propagación, que son los que en este informe se destacan. Estos factores incluyen la pobreza, la falta de educación y el subdesarrollo. El Informe también indaga sobre la relación entre el virus del VIH/SIDA y la trata en los países del hemisferio.

El Informe es concordante con la distinción que hace la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, que contempla el tráfico ilícito de migrantes tal y como se define en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Según dicha definición,¹ el tráfico ilícito de migrantes se entenderá como la constitución de un crimen contra el Estado entre tanto, la trata de personas debe reconocerse como un crimen contra el individuo.² Por ello, mientras los gobiernos deberían adoptar medidas de protección para las víctimas de trata, las personas extranjeras víctimas del tráfico ilícito a menudo son sujetas de deportación.³ El Informe reconoce estas implicaciones que las distinguen en su análisis de la respuesta gubernamental al problema de la trata de personas en los países de América. Por ende, el tráfico ilícito de migrantes está fuera del alcance de este Informe.

¹ El artículo 3(a) del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes define “tráfico ilícito de migrantes” como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.”

² En casos de tráfico ilícito, el extranjero víctima del tráfico que consiente en serlo, a menudo recibe el tratamiento de criminal, mientras que a una persona objeto de la trata se le considera víctima de este crimen puesto que es típico que se le someta “a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad ...” (Artículo 3(a) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas), y como tal, falta el consentimiento de la persona o éste se encuentra viciado. En cualquier caso esto es “irrelevante”

³ Por tanto, a diferencia del Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que le ordena a los Estados Partes considerar otorgarle a las víctimas de trata un estatus temporal o permanente, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes insta a los Estados Partes a “facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación” (Artículo 18(1)). Sin embargo, la persona que es víctima de tráfico ilícito tiene derecho a que se le trate con dignidad hasta que sea deportada. El Protocolo le ordena a los Estados preservar y proteger los derechos de la persona víctima de trata, en particular “el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Artículo 16(1)). A las víctimas de tráfico ilícito se les debería otorgar también “protección apropiada contra toda violencia que puedan infringirles personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el Artículo 6 del presente Protocolo” (Artículo 16(2)), además de la “asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro” por tal motivo (Artículo 16(3)). En el caso de que sean detenidos, el Protocolo ordena a cada Estado Parte que “cumpla con las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuando proceda, incluida la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación de personal consular y a la comunicación con dicho personal.” (Artículo 16(5)).

Dada la complejidad del fenómeno de la trata de personas, todo esfuerzo gubernamental para prevenir y combatir este crimen debe incluir todas las formas de explotación antes mencionadas. El informe señala algunos esfuerzos que se han realizado que incluyen campañas masivas en los medios de comunicación para crear una conciencia pública sobre problema de la trata, conferencias regionales que abordan varios aspectos de la trata, grupos de trabajo gubernamentales especializados en combatir el trabajo infantil y otros problemas relacionados con la explotación de personas menores de edad, Planes Nacionales de Acción para combatir el problema de los niños y niñas de la calle, varios programas “permanezca en la escuela” y otros tipos de reformas educativas y algunas iniciativas de los gobiernos para combatir la explotación sexual, revisión de los procesos de adopción y abordaje de la problemática del trabajo infantil. Los grupos de trabajo nacionales especializados en el combate de la trata, deben cumplir las funciones definidas en sus Planes Nacionales de Acción, desarrollar métodos rigurosos de monitoreo y evaluación que les permita implementar de la mejor manera dichos planes de acción. Son estos grupos los que al final deben hacer recomendaciones a los gobiernos sobre los mejores métodos para combatir la trata y supervisar la implementación de dichas prácticas.

Los gobiernos de los países del hemisferio han tomado varias medidas para ofrecer asistencia y protección a las víctimas de trata, entre las que se incluyen asistencia legal, albergues, centros especiales de ayuda y servicios médicos. También se han realizado una serie de investigaciones sobre casos de trata para explotación de la prostitución o trabajos forzados y algunos enjuiciamientos exitosos de estos casos. Sin embargo, estos esfuerzos para combatir la trata se ven obstaculizados por la falta de recursos adecuados y la corrupción de funcionarios públicos. El Informe documenta estos esfuerzos de protección y los esfuerzos de aplicación de la ley en los países de América. En aquellas circunstancias donde haya deficiencias en las acciones gubernamentales o cuando la respuesta sea inadecuada, el papel de las organizaciones no gubernamentales cobra aún más relevancia. El informe analiza los esfuerzos que han realizado las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la trata de personas, especialmente las que se dirigen a poblaciones infantiles, al enfrentar el fenómeno de la niñez de la calle, los casos de explotación sexual de menores y el trabajo infantil. Al mediar entre el Estado y los individuos, las organizaciones de la sociedad civil llenan vacíos en las políticas gubernamentales actuales. Estas instituciones deben enfatizar el desarrollo de capacidades por medio de mayores iniciativas de cooperación. Además, juegan un papel esencial en apoyar a los grupos nacionales de trabajo en la prevención de la trata, en la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los traficantes.

La revisión de la legislación existente contra la trata de personas en los países del hemisferio, indica que hay ausencia de leyes específicas que tipifiquen y penalicen la trata de personas como un delito separado. Debido a esta falta de legislación particular contra la trata, las leyes actuales incluyen el crimen de la trata de personas como una actividad relacionada con la explotación de la prostitución. El informe incluye una descripción detallada de las disposiciones de los códigos penales que castigan a cualquier persona

involucrada en actividades relacionadas con la prostitución. La mayor parte de las disposiciones de los códigos penales fueron influenciadas por la Convención de 1949 para la Supresión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución de Otros. Sin embargo, el informe se concentra más en la explotación de la prostitución como una actividad de la trata de personas que en el acto de la prostitución en sí mismo. En vista de que el Informe abarca todas las formas de explotación de la trata de personas que se dan en los países de América, en el reporte también se analizan las leyes laborales, las leyes de adopciones, las leyes contra la pornografía, las leyes que prohíben el turismo sexual y otras leyes relacionadas que pueden ser relevantes en el contexto de la trata. Es necesario entonces, una orientación hacia al mandato del Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños para abarcar plenamente todos los aspectos de la trata de personas.

En muchos de los textos legislativos de los países de América no existe una penalización adecuada para el delito de la trata. Los códigos penales castigan con una pena menor la trata de personas para propósitos de prostitución. En forma similar, los códigos penales de muchos países de América no siempre consideran la trata como un delito tan grave como los delitos sexuales. Las leyes no contienen penas semejantes para los delitos por trata como sí los hay para otros delitos graves como la violación sexual.

El informe también examina las disposiciones más importantes de las leyes migratorias que consideran la trata de personas como justificación para denegar la entrada al país o aplicar la deportación. Este enfoque en gran parte niega que la persona que es objeto de la trata sea una víctima, sino más bien la ve como infractora de la ley. No obstante, el informe aclara que la orientación de la ley migratoria hacia el problema de la trata es inadecuada pues considera a la persona objeto de la trata como un migrante ilegal. En este sentido, informes y estudios anteriores siguen el enfoque intercepción-detención-repatriación. El Informe en cambio, adopta una orientación de derechos humanos que sigue el método prevención-protección-enjuiciamiento, el cual cambia el enfoque de control del delito y de migración ilegal a uno de derechos humanos. Un planteamiento basado en los derechos humanos que se enfoque en proteger a las víctimas puede ser un instrumento que contribuya a superar los obstáculos que se enfrentan al aplicar adecuadamente la ley para enjuiciar con efectividad a los tratantes.

El Informe propone también elementos de una legislación modelo que los países del hemisferio puedan considerar para modificar las leyes existentes o promulgar nuevas leyes contra la trata. La legislación modelo se basa en cuatro aspectos principales. El primero es que la legislación contra la trata no solo debe formar parte de las leyes penales, sino que debe abordar todos los aspectos de la trata en una sección separada. En segundo lugar, la legislación contra la trata debe considerar a la persona objeto de la trata como una víctima que es titular de los derechos humanos básicos. En tercer lugar, la legislación contra la trata debe reconocer todas las formas de trata como delitos penales. Por último, debe reconocer la trata como un delito de gravedad que es sujeto de penalización por medio de una sentencia apropiada.

Debido a que la trata de personas es una práctica común entre los países del hemisferio, todo esfuerzo que se haga para combatirla debe comprender políticas regionales y transnacionales dedicadas a establecer cooperación entre los países para arrestar, encarcelar y enjuiciar a los responsables por el acto de la trata. La efectiva implementación de este propósito requiere que los países cooperen ampliamente en la asistencia en asuntos penales, reconociendo que la trata de personas es un delito sujeto de extradición, y tomando las acciones necesarias para prevenir la trata de personas. Los países del continente han promulgado la Convención Interamericana contra el Tráfico Internacional de Menores. El Informe propone una convención regional similar para la trata internacional de personas en especial mujeres y niños, que los países del hemisferio puedan considerar para llegar al necesario consenso regional en cuanto a la definición del delito y a las respuestas gubernamentales apropiadas para combatir el problema.

La Ley de Protección para las Víctimas de la Trata de los Estados Unidos del año 2000 le ordena al Estado publicar un reporte anual sobre el estatus de la trata de personas en otros países. Este Informe examina la información que el Reporte de Estados Unidos ofrece sobre la trata en países del continente y analiza la aplicación de los estándares mínimos para eliminar la trata de personas establecidos en la Ley y que los países del hemisferio deben cumplir.

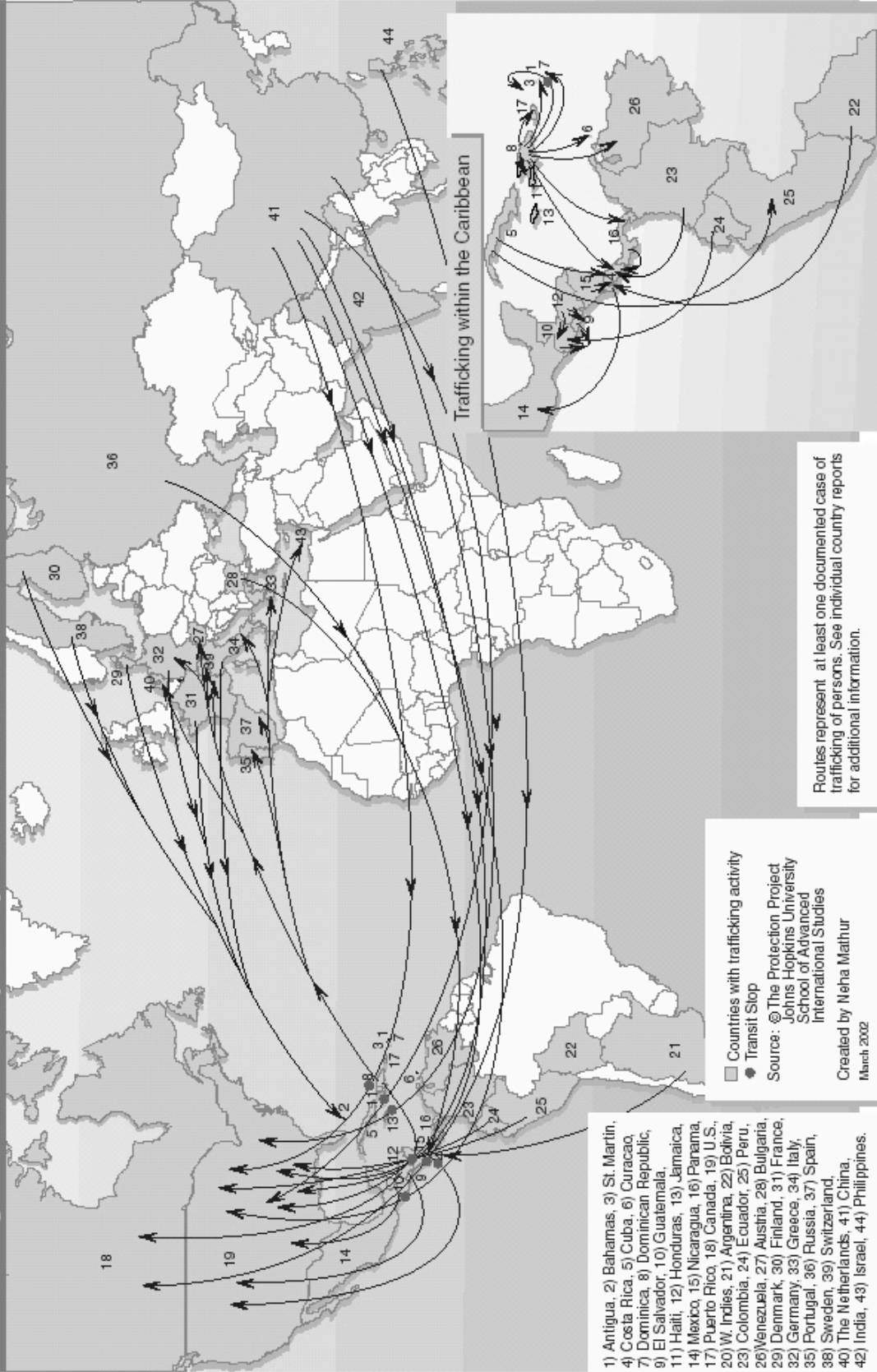
La ratificación del Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por parte de los países del hemisferio, requerirá que los Estados Parte consideren, además de penalizar la trata de personas, brindar la protección y asistencia apropiada a las víctimas de trata, una vez que el Protocolo se convierta en derecho internacional al alcanzarse el depósito del instrumento de ratificación número cuarenta. El Informe discute el tema del cumplimiento de los países del hemisferio con el Protocolo y otras convenciones internacionales que sean relevantes en el contexto de la trata de personas.

Aunque el Informe procura reunir todas las fuentes de información disponibles que documentan el alcance del problema de la trata y las respuestas al mismo, es indudable que se requiere una investigación más extensiva. Es la intención de este Informe sintetizar los estudios e información crítica relevante en este tema; sin embargo, esta investigación tiene vacíos pues pocos informes discuten el problema de la trata en una forma lo suficientemente amplia como para cubrir todas las formas de explotación. Además, muchos de estos informes confunden la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes o al menos no distinguen ambos términos de manera que provean la respuesta apropiada. Deben considerarse todas las formas de trata cuando se discuta el problema en una manera amplia. En la actualidad, existe un grave faltante de estudios confiables y documentos de análisis sobre la trata de personas en los países del continente. Debe llevarse a cabo más investigaciones en los aspectos económicos del delito en las áreas de prostitución, trabajos forzados, pornografía y corrupción. Esto debido a que las investigaciones actuales se realizan dentro de un marco de intercepción-detención-repatriación. También deben explorarse los nexos entre prostitución, reclutamiento

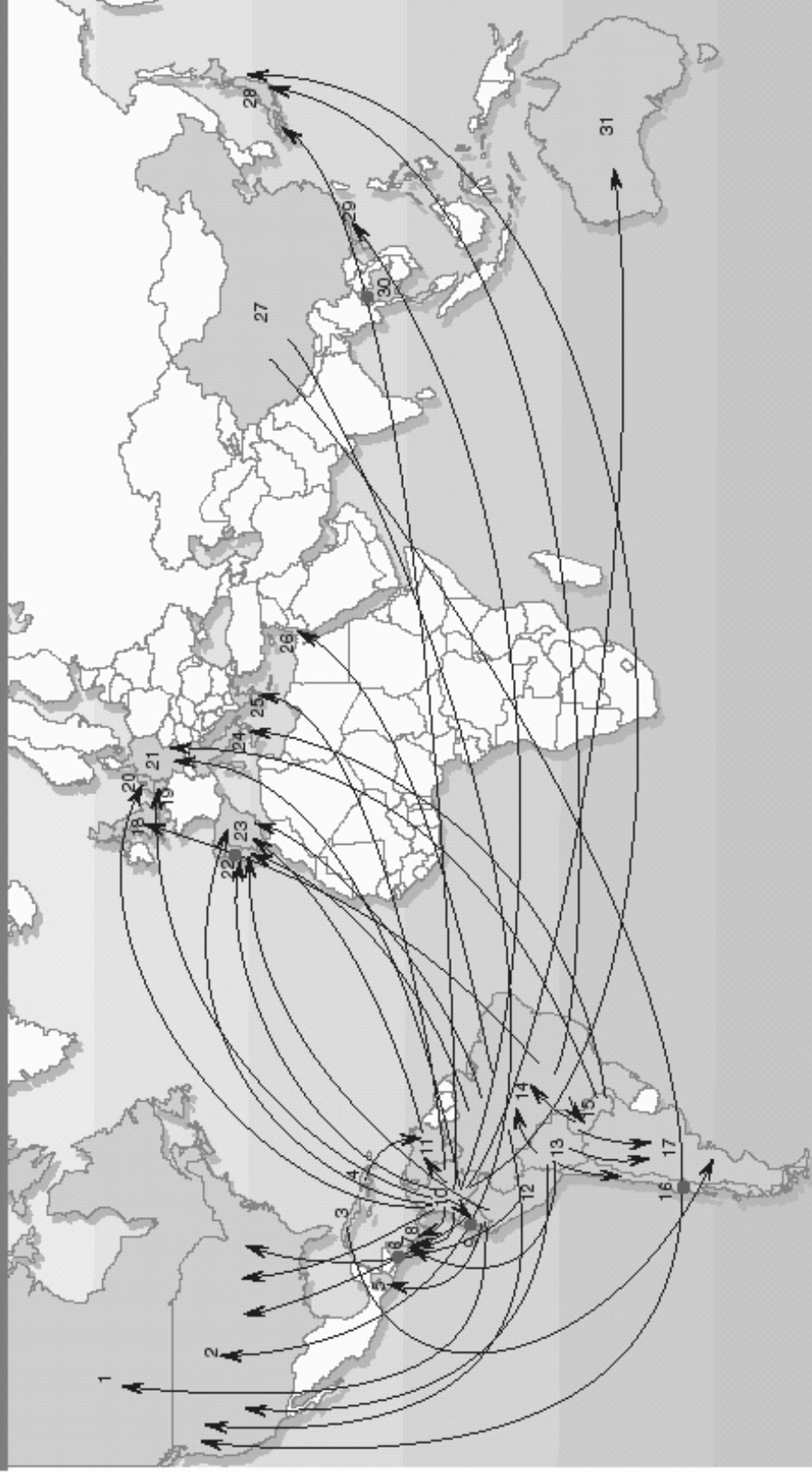
militar, trabajo doméstico, explotación sexual de personas menores de edad, niñez de la calle, trabajo infantil, pornografía, adopción de un país a otro, corrupción y la forma en que se vinculan con la trata de personas y sirven de plataforma de vulnerabilidad para la trata de personas.

Este Informe recomienda que se llenen los vacíos en las investigaciones existentes por medio de la realización de investigaciones de campo y otros métodos de recolección de información, ya que la recopilación e intercambio de información son medidas importantes en la lucha contra la trata de personas.

Trafficking of Persons, Especially Women and Children: Central America and Caribbean Routes



Trafficking of Persons, Especially Women and Children: South America Routes



- 1) Canada, 2) U.S., 3) Cuba, 4) Dominican Republic,
- 5) Guatemala, 6) Nicaragua, 7) Costa Rica,
- 8) Panama, 9) Ecuador, 10) Colombia,
- 11) Venezuela, 12) Peru, 13) Bolivia, 14) Brazil,
- 15) Paraguay, 16) Chile, 17) Argentina,
- 18) United Kingdom, 19) Belgium, 20) Holland,
- 21) Germany, 22) Portugal, 23) Spain, 24) Italy,
- 25) Greece, 26) Israel, 27) China, 28) Japan,
- 29) Hongkong, 30) Thailand, 31) Australia.

- Countries with trafficking activity
- Transit Stop

Source: © The Protection Project
 Johns Hopkins University
 School of Advanced
 International Studies

Created by Neha Mathur
 March 2002

Routes represent at least one documented case of trafficking of persons. See individual country reports for additional information.

**TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN
IN THE COUNTRIES OF THE AMERICAS***

**A Regional Report on the Scope of the Problem and
Governmental and Non-Governmental Responses**

Prepared by

The Protection Project

At

Johns Hopkins University School of Advanced International Studies

* A Report on the problem of trafficking in persons in the countries of Antigua and Barbuda, Argentina, the Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela.

EXECUTIVE SUMMARY

This Report adopts a comprehensive approach to trafficking in persons in the countries of the Americas, where it is estimated that between 700,000 and 2 million people are trafficked annually between countries of origin, transit and destination. The Report documents not only trafficking for the purpose of prostitution, but also trafficking for other forms of sexual exploitation. In this context, the Report focuses primarily on sex tourism and child pornography. The Report also documents labor trafficking, particularly child labor and domestic service. In addition, trafficking for the purpose of illicit intercountry adoption and trafficking for military purposes are covered. These forms of trafficking are attributed to a number of factors that contribute to the trafficking infrastructure, which the Report highlights. These factors include poverty, lack of education and underdevelopment. The Report also inquires into the relation between HIV/AIDS and trafficking in the countries of the Americas.

As such, the Report follows the distinction made by the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, which covers alien smuggling in the Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Smuggling of migrants, as defined by the Protocol,⁴ constitutes a crime against the state while trafficking in persons should be recognized as a crime against the individual.⁵ Consequently, while governments should adopt protective measures to protect victims of trafficking, smuggled aliens are often subject to deportation.⁶ The Report recognizes these distinct implications in its analysis of government responses to the problem of trafficking in persons in the countries of the Americas.

⁴ Article 3(a) of the Smuggling of Migrants Protocol defines “illegal migrant smuggling” to mean “the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.”

⁵ In cases of alien smuggling, the smuggled alien, consenting to be smuggled, is often treated as a criminal, whereas a trafficked person is considered a victim of the crime of trafficking since the trafficked person is typically subject to the “threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, or fraud and deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability...” (Article 3(a) of the Trafficking in Persons Protocol), and as such, the person’s consent is either lacking altogether or defective. In either case it becomes “irrelevant.”

⁶ Therefore, unlike the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, which mandates States Parties to consider granting victims of trafficking temporary or permanent status, the Smuggling of Migrants Protocol calls upon States Parties to “facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the return of a person who has been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol and who is its national, or who has the right of permanent residence in its territory at the time of return” (Article 18(1)). Nonetheless, the smuggled person is entitled to be treated with dignity until such person is deported. The Protocol mandates that Parties preserve and protect the rights of a smuggled alien, including “the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (Article 16(1)). The smuggled aliens should also be afforded “appropriate protection against violence that may be inflicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol” (Article 16(2)), in addition to the “appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered” by such reason (Article 16(3)). In the case of their detention, the Protocol mandates that each State Party must “comply with its obligations under the Vienna Convention on Consular Relations, where applicable, including that of informing the person concerned without delay about the provision concerning notification to and communication with consular officers” (Article 16(5)).

Consequently, any governmental efforts to combat trafficking must specifically include all these forms of trafficking. The Report shows that some efforts have been made, some of which include mass media campaigns to raise public awareness of the problem of trafficking, regional conferences that address the various aspects of the problem of trafficking, governmental task forces to combat child labor and other issues related to exploitation of children, National Plans of Action to combat the problem of street children, various “stay in school” programs and other types of educational reform and some governmental initiatives to combat sexual exploitation, oversee the adoption process and address the problem of child labor. National task forces designed to combat trafficking by carrying out all necessary functions outlined by a National Plan of Action must develop thorough methods for monitoring and evaluating the implementation of these action plans. Task forces must ultimately make recommendations to governments about best methods for combating trafficking and supervise the implementation of such practices.

Moreover, there have been some measures taken on the part of the governments of the countries of the Americas to provide victims of trafficking with assistance and protection including legal assistance, shelters, special assistance centers and health care. There have also been a number of investigations of cases of trafficking for the purpose of prostitution or forced labor and some successful prosecutions of these cases. Nonetheless, lack of adequate resources and corruption of public officials, whether law enforcement or immigration officials, make difficult any sustained efforts to combat trafficking. The Report documents these protective measures and law enforcement efforts in the countries of the Americas. With government failure or inadequate response, the role of non-governmental organizations and other elements of civil society becomes imperative. The Report examines efforts made by non-governmental organizations working to combat trafficking in persons, especially those working with children, in an effort to address the phenomenon of street children, cases of sexual exploitation of children and child labor. By mediating between the State and the individual, civil society institutions fill the gaps in existing State government policies. These institutions must emphasize capacity-building through increased cooperative initiatives. These institutions may play a pivotal role in assisting anti-trafficking task forces in preventing trafficking, protecting victims and prosecuting traffickers.

A review of the existing anti-trafficking legislation in the countries of the Americas indicates the absence of specific laws criminalizing trafficking in persons as a separate offense. Because of this lack of anti-trafficking legislation, current laws focus on trafficking in persons as a prostitution-related activity. The Report includes a detailed account of the provisions of the penal or criminal codes that penalize anyone who is engaged in prostitution-related activities. Most of the provisions of these criminal and penal codes were influenced by the language of the 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others. However, the Report focuses on exploitation of prostitution as a trafficking activity rather than on the act of prostitution itself. Since the Report attempts to cover all forms of trafficking in the

countries of the Americas, it also discusses labor law, adoption law, laws against pornography, laws prohibiting sex tourism and other related laws that may be relevant in the context of trafficking. A shift towards the mandate of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is necessary to fully address all aspects of trafficking in persons.

Many of the legislative texts of the countries of the Americas do not provide for the appropriate sentence to the crime of trafficking. The criminal or penal codes provide for a lesser sentence for trafficking in persons for the purpose of prostitution. Similarly, the criminal or penal codes of many of the countries of the Americas do not always consider sex trafficking as grave a crime as other sexual offenses. The laws do not impose similar punishments for trafficked offenses as for other serious crimes such as rape.

The Report also examines the relevant provisions of immigration law that consider trafficking in persons as grounds for denial of entry or deportation. This approach, largely disregards the trafficked person as a victim rather than a perpetrator of the crime. The Report, however, makes clear that an immigration law approach to the problem of trafficking, which considers the trafficked person as an illegal migrant, is inadequate. Previous reports and studies follow the interception-detention-repatriation approach. The Report, however, adopts a human rights approach, following the prevention-protection-prosecution method, which shifts the focus from crime control and illegal immigration to human rights. A human rights approach focusing on the protection of the victims could be instrumental in helping overcome obstacles encountered in administering proper law enforcement that effectively prosecutes traffickers.

The Report also proposes elements of a model legislation to be considered by countries of the Americas in modifying existing laws or enacting new anti-trafficking laws. The model legislation is based on four main principles. First, an anti-trafficking legislation should not only be a part of criminal law, but must also address all aspects of trafficking in a separate act. Secondly, an anti-trafficking legislation must treat the trafficked person as a victim who is entitled to basic human rights. Thirdly, an anti-trafficking legislation must recognize all forms of trafficking as criminal offenses. Lastly, it must recognize trafficking as a serious crime, which is punishable by an appropriate sentence.

Since trafficking in persons occurs very often between the countries of the Americas, any effort to combat trafficking in persons must include regional, transnational policies aimed at establishing cooperation among these countries to arrest, convict and prosecute those who are responsible for the act of trafficking. The effective implementation of this objective requires countries to fully cooperate in providing assistance in criminal matters, recognizing trafficking in persons as an extraditable offense, and taking all the necessary steps to prevent trafficking in persons. Countries of the Americas have enacted the Inter-American Convention on International Traffic in Minors. This Report proposes a similar regional convention on international trafficking in persons, especially women and children, which must be considered by countries of the Americas to build the necessary

regional consensus as to the meaning of trafficking of persons and the appropriate governmental responses to combat the problem.

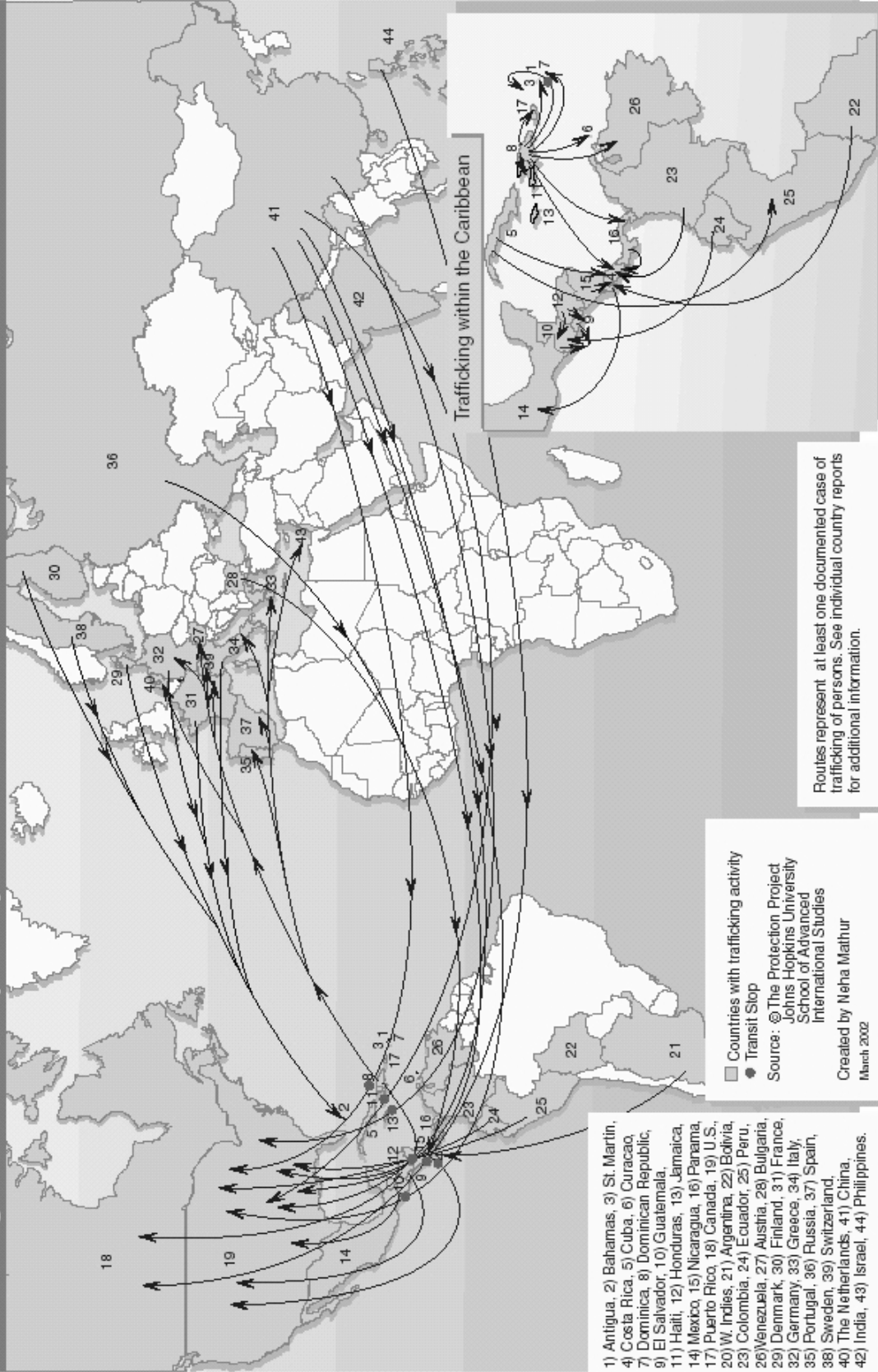
The United States Trafficking Victims Protection Act of 2000 mandates that the U.S. publish an annual report on the status of trafficking in persons in foreign countries. This Report examines the information provided by the U.S. report on trafficking in countries of the Americas and analyzes the application of the minimum standards for the elimination of trafficking in persons set by the Act, which must be met by countries of the Americas.

The ratification of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing the Convention against Transnational Organized Crime by the countries of the Americas will require State Parties to consider, in addition to criminalizing trafficking in persons, providing appropriate protection and assistance to victims of trafficking when the Protocol becomes international law upon the deposit of the fortieth instrument of ratification. The Report addresses the issue of compliance of the countries of the Americas with the Protocol and other international conventions that are relevant in the context of trafficking in persons.

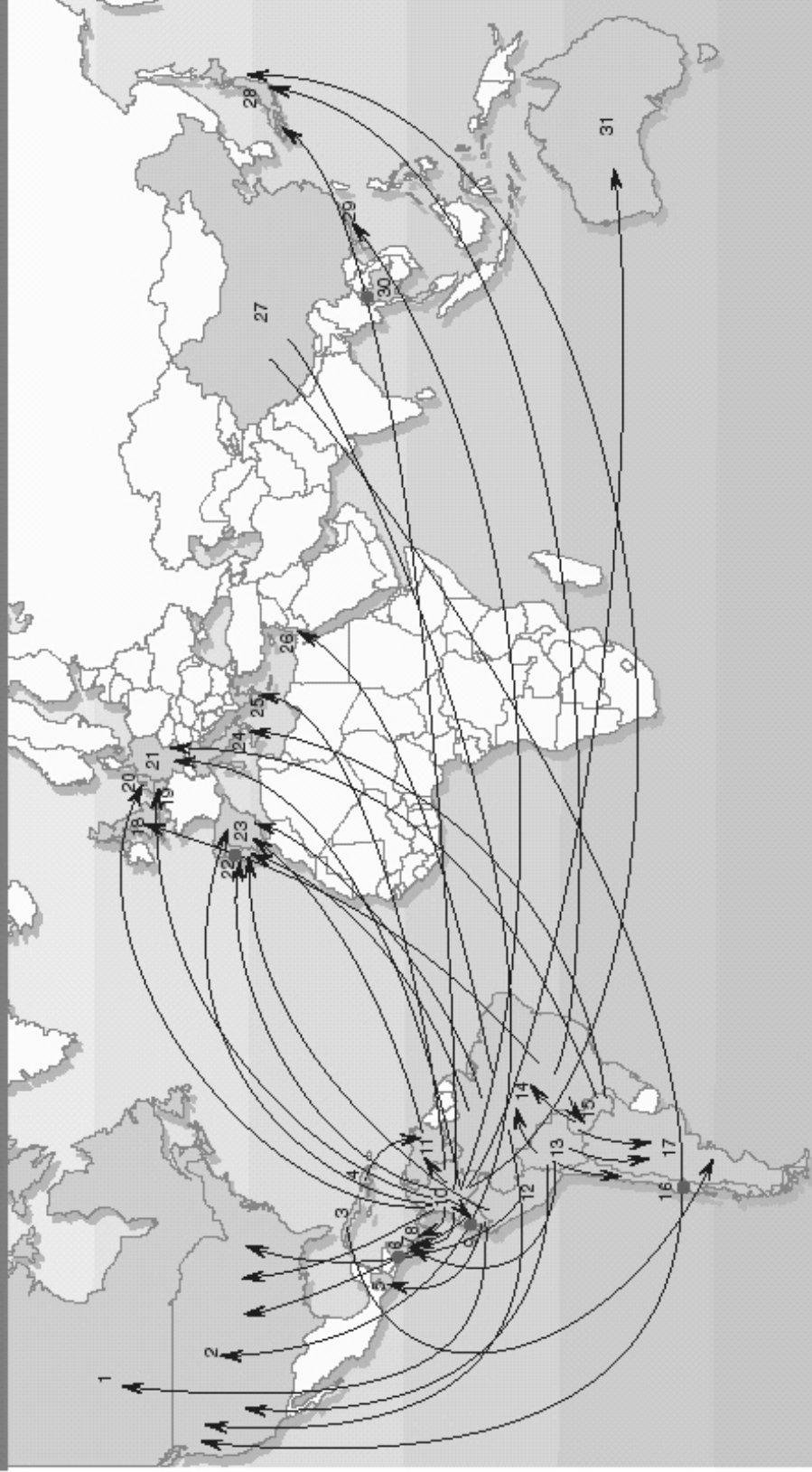
While the Report strives to collect all available sources of information that document the scope of the problem of trafficking and the responses to this problem, further research is undoubtedly needed. This Report is intended to be a synthesis of studies, critiquing relevant information on this topic; however, gaps exist in current research. Few reports address the problem of trafficking comprehensively enough to cover all forms of trafficking. In addition, many of these reports confuse trafficking in persons and alien smuggling, or at least do not distinguish between them in articulating the appropriate response. All forms of trafficking must be kept in consideration when comprehensively addressing the problem. Currently, there is a severe lack of reliable research and analysis on trafficking in persons in the countries of the Americas. Research needs to be conducted on the economics of trafficking in the areas of prostitution, forced labor, pornography and corruption. Existing research is conducted within the framework of the interception-detention-repatriation. Research must also be conducted to determine links between prostitution, military conscription, domestic work, child sexual exploitation, street children, child labor, pornography, corruption and intercountry adoption as they relate to trafficking in persons and how they create the infrastructure of vulnerability to trafficking in persons.

This Report recommends filling the gaps in existing research by conducting fact-finding missions and other direct methods of information-gathering, since information-gathering and information-sharing are important measures in the fight against trafficking in persons.

Trafficking of Persons, Especially Women and Children: Central America and Caribbean Routes



Trafficking of Persons, Especially Women and Children: South America Routes



- 1) Canada, 2) U.S., 3) Cuba, 4) Dominican Republic,
- 5) Guatemala, 6) Nicaragua, 7) Costa Rica,
- 8) Panama, 9) Ecuador, 10) Colombia,
- 11) Venezuela, 12) Peru, 13) Bolivia, 14) Brazil,
- 15) Paraguay, 16) Chile, 17) Argentina,
- 18) United Kingdom, 19) Belgium, 20) Holland,
- 21) Germany, 22) Portugal, 23) Spain, 24) Italy,
- 25) Greece, 26) Israel, 27) China, 28) Japan,
- 29) Hongkong, 30) Thailand, 31) Australia.

□ Countries with trafficking activity
● Transit Stop

Source: © The Protection Project
Johns Hopkins University
School of Advanced
International Studies

Created by Neha Mathur
March 2002

Routes represent at least one documented case of trafficking of persons. See individual country reports for additional information.